

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
AGUSTÍN CODAZZI – CESAR**

Agustín Codazzi – Cesar, Octubre Nueve (9) de Dos Mil Veinte (2.020).

REF: Acción de Tutela promovida por LUIS HERNEY GIRALDO , en contra de la SECRETARÍA DE HACIENDA DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR y el MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR

Radicación No.: **200134089001-2020-00088-00**

ASUNTO A TRATAR

Aborda el Despacho adoptar la decisión de fondo que en derecho corresponda, dentro de la Acción de Tutela promovida por el señor LUIS HERNEY GIRALDO, en contra de la SECRETARÍA DE HACIENDA DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR, habiéndose vinculado, también como accionado, al MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR en defensa de su Derecho Fundamental de Petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes.....

ANTECEDENTES

Correspondió a este despacho, por reparto, la presente acción de tutela promovida por el señor LUIS HERNEY GIRALDO, en contra de la SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR, habiéndose vinculado, también como accionado, al MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR, en defensa de su Derecho Fundamental de Petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y en virtud de ello solicita se le ordene a la accionada, lo siguiente: **a).** _ Revisar y liquidar, el impuesto predial que históricamente presenta un crecimiento desproporcionado que viola el Artículo 4° de la ley 44 de 1990. **b).** _ Que se ordene la solución y no dilatación de la respuesta, pues afecta su intención de disfrutar el beneficio de pagar en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante Decreto 637 de 2020. **c).** _ Que se ordene revisar sus liquidaciones de impuestos.

Los hechos en los que la accionante finca su solicitud, los podemos enunciar así:

- Que el día 30 de Junio del 2020, envió derecho de petición y otro oficio con fecha 29 de Julio del 2020, a la SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR. También manifiesta que puede demostrar la configuración de un silencio administrativo, o respuestas después de termino, a pesar de sus llamadas y correos para obtener solución a sus requerimientos.

Por venir en legal forma la solicitud fue admitida mediante auto de fecha 28 de Septiembre del año que cursa, requiriéndose a la Entidad Accionada SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR, y al vinculado el MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR, para que en el término de dos (2) días contados a partir de la fecha de la notificación del auto admisorio, se sirvieran rendir un informe sobre los hechos planteados por el peticionario; habiéndose pronunciado la segunda, a través del señor HAROLD ALBERTO RODRIGUEZ APONTE, en su aludida calidad de Secretario Jurídico del Municipio de Agustín Codazzi-Cesar, mientras que la primera guardó absoluto silencio.

CONTESTACIÓN DEL ACCIONADO MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR

El Señor HAROLD ALBERTO RODRÍGUEZ APONTE, en su aludida calidad de Secretario Jurídico del Municipio de Agustín Codazzi-Cesar, mediante contestación enviada al correo electrónico del despacho, manifiesta que ese organismo, en aras de salvaguardar el derecho fundamental de Petición, procedió a emitir respuesta a las dos solicitudes de petición que hizo el señor GIRALDO LINDARTE, las cuales se contestaron en el mismo escrito, debido a que giran en torno a los mismos hechos y por economía procesal se hizo de esta manera, mediante oficio de fecha 9 de Septiembre de 2020, habiéndosele enviado el mismo al correo electrónico lhgiraldo20@gmail.com, indicado por el peticionario.

Agrega el Secretario Jurídico de la entidad accionada que, frente a la protección del derecho fundamental de petición, existe carencia actual de objeto por hecho superado y en consecuencia solicita se profiera un fallo desestimatorio de las peticiones por cuanto actualmente no existe una violación a los derechos argumentados, así mismo manifiesta que el accionante solo pretende una respuesta positiva y que no es el objeto de estudio de esta acción constitucional.

Una vez enunciados los antecedentes del caso y habiendo sido relacionado el acervo probatorio acopiado, procederemos a adoptar la decisión de fondo que en estricto derecho corresponda, previas las siguientes...

CONSIDERACIONES

1. _ Competencia

Para el Juzgado es claro que la competencia para conocer de la presente Acción de Tutela, recae en este despacho al tenor del artículo 37 del Decreto - ley 2591 de 1991 y del Decreto 1382 de 2000.

2. _ Legitimidad de las Partes

El accionante, LUIS HERNEY GIRALDO, por ser la persona afectada con las presuntas acciones y omisiones de las entidades demandadas, se encuentra legitimado para incoar la presente acción de amparo. Así mismo, la SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR y EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - CESAR, por ser la primera la entidad a la cual el accionante le atribuye los actos que presuntamente vulneran su derecho fundamental cuyo amparo es deprecado y la segunda por haber sido vinculada a esta actuación, reúnen los presupuestos de legitimidad para comparecer en calidad de accionadas, dentro de este trámite tutelar.

3. _ Problemas jurídicos y esquema de resolución

De acuerdo con la situación fáctica planteada corresponde a este despacho determinar los siguientes aspectos: *i).* _ La procedencia de la acción; y, *ii).* _ De ser procedente la acción, establecer si las entidades accionadas, SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR y el MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR, por presuntamente no haberle brindado una respuesta a la solicitud presentada en virtud del derecho de petición, por el señor LUIS HERNEY GIRALDO LINDARTE, vulnera el derecho fundamental cuyo amparo es deprecado, y de ser así, adoptar las medidas de protección pertinentes, o si nos encontramos ante la figura denominada "hecho superado".

Para resolver los problemas jurídicos planteados, este despacho procederá de la siguiente manera: **1).** _ Se determinará la procedencia de la acción. **2).** _ Se referirá al derecho fundamental cuya protección se impetra. **3).** _ Se traerá como referencia la Ley 1755 de 2015, respecto al término para emitir respuesta a las peticiones. **4).** _ Se hará alusión al fenómeno denominado "hecho superado"; **5).** _ Se abordará el caso en concreto.

3.1. _ Procedencia

Respecto a la procedencia de la acción de tutela es dable aclarar que ésta al ser elevada a precepto constitucional por el Constituyente de 1991, ha sido concebida como un medio de defensa, ágil, eficaz, preferente, residual y sumario de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y en algunos casos por los particulares cuando estos se encuentren en alguna de las siguientes condiciones: a). _ Cuando cumplan funciones públicas o que estén encargadas de la prestación de un servicio público. b). _ Cuando sus acciones u omisiones afecten grave y directamente el interés colectivo; y c). _ Cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión respecto al particular.

En razón de lo anterior Nuestra Carta Política en su artículo 86 dispone:

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública".

Se le quiso dar a esta herramienta constitucional un efecto inmediato y subsidiario al limitar su procedencia a la inexistencia de otro medio de defensa judicial de igual eficacia para la protección del derecho, o que, habiéndolo, esta se utilice como mecanismo de carácter transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Quiere lo anterior significar que la acción de tutela es un mecanismo judicial de protección de los derechos fundamentales que procede i) cuando el afectado no dispone de otro instrumento para su restablecimiento, ii) en caso de que el previsto no resulte eficaz, en consideración a la situación particular que afronta el actor y iii) siempre que la intervención transitoria del juez de amparo resulte necesaria, para evitar o al menos mitigar un perjuicio irremediable.

En el caso bajo estudio el Despacho no observa la existencia de otro medio eficaz de defensa que le permita al accionante obtener la protección del derecho presuntamente vulnerado, por lo tanto es factible pregonar de la acción incoada, su procedencia.

3.2. Derecho Fundamental cuya protección se invoca

3.2.1. Derecho de Petición. En este orden de ideas cabe señalar que el Derecho de Petición es de aquellos que por su naturaleza de Constitucionales y Fundamentales admiten su protección a través de la vía expedita y sumaria de la Acción de Tutela. Consagra el artículo 23 Superior:

"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución."

Ahora bien, para que no se torne inocuo el derecho fundamental de petición, se requiere no solo que el peticionario tenga la facultad de presentar la solicitud, sino, que esta sea resuelta en forma rápida, oportuna y de fondo. No basta entonces que el encargado de resolver la petición, se limite a generar una respuesta somera o superficial sobre el asunto objeto del derecho que se impetra. Se hace necesario también que se le dé una resolución a la situación planteada dentro de la solicitud y que el interesado reciba de manera real y efectiva la solución brindada, siendo indispensable que esa resolución se ponga en conocimiento de los interesados a través de un medio que asegure su eficacia.

Sobre el particular nos ilustra la sentencia T-181 de 1993 con ponencia del Magistrado Hernando Herrera Vergara, en los siguientes términos:

"(...) Puede afirmarse que el derecho fundamental sería inocuo si solo se formulara en términos de poder presentar la respectiva petición. Lo que hace efectivo el derecho es que la petición elevada sea resuelta rápidamente. De nada serviría el Derecho de Petición, si la misma Constitución no consagrara el correlativo deber de las autoridades de proferir pronta resolución (...)"

Más adelante, en Sentencia a T-558 de 2012, dijo:

"(...) El derecho de petición, como institución jurídica, encuentra su razón de ser en la necesidad de regular las relaciones entre las autoridades y los particulares, con el fin de que estos últimos puedan conocer y estar al tanto de las actuaciones de cualquier ente estatal. Desde este punto de vista, su núcleo esencial está en la pronta respuesta que se le brinde a las solicitudes presentadas.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha señalado la relevancia que cobra el derecho fundamental de petición, ya que se constituye en un instrumento clave para el funcionamiento de la democracia participativa, y para el acceso a derechos como el de información y libertad de expresión, entre otros.

En ese orden de ideas, la Corte ha manifestado, a su vez, que el derecho de petición no solo implica la posibilidad de presentar solicitudes a las autoridades estatales o a entes particulares, cuando la ley lo permita, sino, de igual manera, que se de una oportuna respuesta con sujeción a los requerimientos establecidos en la ley para dicha petición. Es decir, independientemente de que lo resuelto por la entidad sea adverso o no a los intereses del peticionario, la resolución del asunto debe contar con un estudio minucioso de lo pretendido, argumentos claros, que sea coherente, dé solución a lo que se plantea de manera precisa, suficiente, efectiva y sin evasivas de ninguna clase. Sobre el particular ha sostenido la Corporación que:

"... una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta"

"(...) Así, para tener claridad sobre los elementos del derecho de petición, esta Corporación ha indicado que el mismo se compone de:

"1. La posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.

2. La obtención de una respuesta que tenga las siguientes características:

- (i) Que sea oportuna;
- (ii) Que resuelva de fondo, en forma clara y precisa lo solicitado; lo cual supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud de manera completa, sin evasivas respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados.
- (iii) Que la respuesta sea puesta en conocimiento del peticionario.

3. La respuesta es independiente del hecho de si es favorable o no, pues no necesariamente dar una respuesta de fondo implica acceder a lo pedido.

"(...) Bajo ese entendido, para que la respuesta a la petición se encuentre ajustada a la ley y a lo que la jurisprudencia constitucional ha manifestado al respecto, la misma, además de ser oportuna y de fondo como ya se mencionó, debe ser comunicada al peticionario. (Subrayas y negrillas ajenas al texto original).

De igual manera, por tratarse de un derecho con categoría fundamental, es susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela. No obstante, para que el amparo proceda, no basta con afirmar que se elevó una petición, sino que debe haber prueba, siquiera sumaria, de la misma, es decir, que se cuente con algún tipo de herramienta que permita respaldar la afirmación, y por su parte, es la autoridad la que debe demostrar que dio respuesta oportuna, clara y de fondo a la solicitud (...)"

En ocasión ulterior, en Sentencia T-801/12, dispuso:

"(...) En relación con su contenido y alcance, la Corte ha explicado que: i) es determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia; ii) su contenido esencial comprende: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en el fondo de la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo (...)"

3.3. Ley 1755 de 2015 (Reglamentación al Derecho de Petición).

Procedente es analizar lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 respecto de los términos para responder los derechos de petición, el cual menciona:

"Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto."

3.4. _ Hecho superado.

La Corte Constitucional ha sido reiterativa en aclarar que una vez superada la situación de hecho que generó la vulneración o la amenaza del derecho fundamental, la acción de amparo perdería su eficacia tornándose improcedente e inócua.

Sobre el particular, en sentencia T-167 de 1.997, nos ilustra:

"(...) El objetivo fundamental de la acción de tutela es la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en aquellos casos en que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión o de una autoridad pública o de un particular en los términos en que establece la constitución y la ley. Obsérvese que la eficacia de esta acción se manifiesta en la posibilidad que tiene el juez constitucional si encuentra probada la vulneración u amenaza alegada, de impartir una orden encaminada a la defensa actual e inminente del derecho en disputa. Pero si la situación de hecho que generó la violación o la amenaza ya ha sido superada, el mandato que pueda proferir el juez en defensa de los derechos fundamentales conculcados, ningún efecto podría tener, el proceso carecería de objeto y la tutela resultaría improcedente; en otras palabras, la acción de tutela perdería su razón de ser (...)"

En Sentencia T-013 de 2017, reiteró:

"(...) El hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que "carece" de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. Es decir, el hecho superado significa la observancia de las pretensiones del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente transgresor. El daño consumado tiene lugar cuando "la amenaza o la vulneración del derecho fundamental han producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela. La configuración de este supuesto ha sido declarada por la Corte, por ejemplo, en los casos en que el solicitante de un tratamiento médico fallece durante el trámite de la acción como consecuencia del obrar negligente de su F.P.S., o cuando quien invocaba el derecho a la vivienda digna fue desalojado en el curso del proceso del inmueble que habitaba (...)"

3.5. _ El caso concreto.

En el evento que nos ocupa, del caudal probatorio compendiado especialmente de lo manifestado en la solicitud por parte del accionante puede inferirse sin hesitación alguna, que la situación planteada consiste en que el señor LUIS HERNEY GIRALDO, reclama ante la entidad accionada emita respuesta a la solicitud incoada por él en virtud del Derecho de Petición, interpuesto el día 30 de Junio de 2020, en el cual actúa en nombre propio, observando este despacho que el señor HAROLD ALBERTO RODRIGUEZ APONTE, en su calidad de Secretario Jurídico de la entidad accionada, al pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones de la solicitud de tutela, manifiesta que mediante documento enviado al correo electrónico lhgiraldo20@gmail.com, suministrado por el petente, fue emitida respuesta de fondo a la solicitud elevada por el referido accionante, tal como se puede apreciar en el oficio enviado el día 9 de Septiembre del presente año.

Emana entonces, de todo lo anterior que el representante, para estos efectos, del Municipio de Agustín Codazzi-Cesar, afirma que ya fue resuelta de fondo la solicitud incoada por el actor en ejercicio del Derecho de Petición, a la que se contrae esta acción constitucional, aportando parcialmente prueba de sus asertos, por cuanto, tal como consta en los folios 13 a 16, donde milita Oficio adiado 9 de Septiembre del año en marcha, siendo incluso, lo allí decidido, objeto de recurso de apelación por parte del interesado, lo que se puede constatar con el memorial de fecha 16 de Septiembre del mismo año, obrante a folios 45 a 50 de esta actuación, no obstante a la fecha, no obra en este trámite tutelar evidencia de que la entidad accionada hubiese emitido algún pronunciamiento respecto al Recurso de Alzada interpuesto

por el actor, es decir, no ha sido determinado por la entidad accionada si el recurso es o no procedente, y en caso de serlo no ha sido este resuelto, de donde fluye entonces que aún faltan actuaciones a cargo de la entidad accionada para considerar qué ha sido resuelta en debida forma las solicitudes incoadas, con lo cual no solo se le vulnera al actor su derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 superior, sino que también le es conculcado su derecho fundamental al debido proceso establecido en el artículo 29 ibidem, como quiera que uno de las garantías que integran este macro concepto, es a que en todas las actuaciones, administrativas y judiciales, sean observados los términos establecidos en la ley y en el evento que nos ocupa – se itera –, aún no ha habido un pronunciamiento respecto al recurso de apelación interpuesto por el hoy accionante, pudiéndose colegir entonces que, contrariamente a lo afirmado por el señor Secretario Jurídico del Municipio Agustín Codazzi, no nos encontramos ante el fenómeno denominado "Pecno Superado", siendo procedente entonces otorgar al accionante el amparo de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, incluso, para lo cual se le ordenará a los señores representantes legales de las entidades accionadas SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL y MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR, o a quienes hagan sus veces, que en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, si aún no lo hubieren hecho, procedan a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el actor mediante memorial de fecha 16 de Septiembre de 2020 en contra de lo decidido y comunicado mediante Oficio adiado 9 del mismo mes y año, es decir, determinar su procedencia o su no procedencia, y de ser procedente, darle el trámite correspondiente para que éste sea objeto de decisión, conforme a las normas que reglan la materia.

Igualmente se le prevendrá para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las conductas omisivas que dieron lugar a la presente acción de tutela.

En lo atinente a la inconformidad de accionante respecto a la forma en que fueran realizadas las diferentes liquidaciones de impuestos respecto a los predios por este relacionados, no habrá pronunciamiento pro considerar esta casa judicial que por la naturaleza de orden económico o patrimonial de lo pretendido, deberá acudir para desatar la controversia planteada, a la actuación administrativa surtida ante la misma accionada, tal como se viene haciendo o ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En mérito de lo antes expuesto el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi – Cesar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero. Conceder el Amparo Tutelar a los derechos fundamentales de Petición y al Debido Proceso, solicitado por el señor **LUIS HERNEY GIRALDO** por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. En consecuencia, ordénese a los señores representantes legales de las entidades accionadas SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL y MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR, o a quienes hagan sus veces, que en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, si aún no lo hubieren hecho, procedan a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el actor mediante memorial de fecha 16 de Septiembre de 2020 en contra de lo decidido y comunicado mediante Oficio adiado 9 del mismo mes y año, es decir, determinar su procedencia o su no procedencia, y de ser procedente, darle el trámite correspondiente para que este sea objeto de decisión, conforme a las normas que reglan la materia.

Segundo. Prevengase a los representantes legales de las accionadas, para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las conductas omisivas que dieron lugar a la presente acción de tutela.

Tercero. Notifíquese este fallo a las partes intervinientes, por el medio más expedito (art. 16 del decreto 2591 de 1991).

REF: Acción de tutela promovida por el señor LUIS HERNEY GIRALDO en contra de SECRETARIA DE HACIENDA DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR y el MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR RAD. 200134089001-2020-00086-00.

Cuarto. _ Contra esta decisión procede el recurso de impugnación. Si no fuere impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación, envíese a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión por el medio más eficaz notifíquese a los interesados.-

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ALGEMIRO DIAZ MAYA

Juez